Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS** los expedientes electrónicos formados con motivo de los recursos de revisión números **06015/INFOEM/IP/RR/2024 y 06016/INFOEM/IP/RR/2024,** interpuestos por un particular que no proporcionó nombre o seudónimo, en lo sucesivo la parte **Recurrente**, en contra de las respuestas del **Secretaría de la Contraloría**, en lo subsecuente el **Sujeto Obligado**, se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S D E L A S U N T O**

**PRIMERO.** **De las Solicitudes de Información.**

Con fecha **treinta de agosto y veintitrés de septiembre** de dos mil veinticuatro, la parte **Recurrente** presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)** ante **El Sujeto Obligado**, solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual solicitó información en el tenor siguiente:

1. **00350/SECOGEM/IP/2024:**

“Solicito información sobre el número de denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense en 2023 y 2024, tipo de denuncia, dependencia proveniente, medidas implementadas” (sic)

1. **00323/SECOGEM/IP/2024:**

“Solicito la versión pública del paquete de denuncias presentado por la Contraloría a la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) en contra de exfuncionarios mexiquenses.” (sic)

**Modalidad de entrega:** A través del SAIMEX.

**SEGUNDO. De las respuestas a las solicitudes o entrega de información.**

De las constancias que obran en el expediente electrónico, se advierte que el día **veintidós y veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro**, el **Sujeto Obligado** dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

1. **00350/SECOGEM/IP/2024:**

*“Estimado solicitante. Espero se encuentre de maravilla, le informo que en archivos adjuntos encontrará el oficio firmado por el servidor público habilitado que atiende su solicitud y el oficio de respuesta firmado por el Encargado de Despacho de la Unidad de Prevención de la Corrupción; y, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría. ¡Que tenga un excelente día! “(Sic).*

1. **00323/SECOGEM/IP/2024:**

“Estimado solicitante. Espero se encuentre de maravilla, le informo que en archivos adjuntos encontrará los oficios de respuesta firmados por los servidores públicos habilitados que atienden su solicitud y el oficio de respuesta firmado por el Encargado de Despacho de la Unidad de Prevención de la Corrupción; y, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría. ¡Que tenga una excelente tarde!” (sic)

Adicionalmente, el Sujeto Obligado adjuntó los archivos electrónicos denominados ***“OFICIO SOLICITANTE.pdf”, “OFICIO RESPUESTA SPH.pdf”, “RESPUESTA SPH OIC.pdf”, “RESPUESTA SPH CJIG.pdf”, “RESPUESTA SRADM.pdf”*** y “***OFICIO SOLICITANTE UT.pdf”,*** mismos que no se reproducen por ser del conocimiento de las partes, sin embargo, serán materia de estudio en el considerando respectivo.

**TERCERO. De los recursos de revisión.**

Inconforme con la respuesta notificada por **El Sujeto Obligado,** la parte **Recurrente** interpuso recurso de revisión, en fecha **once y dieciocho de junio de dos mil veinticuatro**, el cual fue registrado en el sistema electrónico con el expediente número **06015/INFOEM/IP/RR/2024 y 06016/INFOEM/IP/RR/2024;** en los cuales arguye las siguientes manifestaciones:

|  |  |
| --- | --- |
| ***No. Recurso de Revisión*** | ***Acto impugnado y razones o motivos de inconformidad*** |
| **06015/INFOEM/IP/RR/2024** | ***Acto impugnado***  *“No dio la información completa” (sic)*  ***Razones o motivos de inconformidad***  “Si bien la dependencia no está obligada a generar documentos ad hoc, si está obligada de proporcionar la documentación donde se puede corroborar la información que se genere dentro de sus atribuciones, por lo que negarla bajo el pretexto de no querer procesar la información solicitada es un pretexto infundado para no transparentar datos que deben ser de acceso público.” (sic) |
| **06016/INFOEM/IP/RR/2024** | ***Acto impugnado***  *“Negó la información” (sic)*  ***Razones o motivos de inconformidad***  “La dependencia afirma que no cuenta con dicha información; sin embargo, ellos mismos lo anunciaron de forma pública como se muestra en el siguiente link: https://smmp.edomex.gob.mx/noticia/edomex-alista-denuncias-penales-exfuncionarios-eruviel-mazo-por-dano-hacienda” (sic) |

**CUARTO. Del turno y admisión de los recursos de revisión.**

El medio de impugnación fue turnado al Comisionado Presidente **José Martínez Vilchis,** por medio del sistema electrónico SAIMEX, en términos del artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, del cual recayó acuerdo de **admisión** en fecha **ocho y diez de octubre de dos mil veinticuatro**, determinándose en ellos, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de instrucción.**

De las constancias que obran en el expediente electrónico del SAIMEX, se advierte que el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado en fecha diecisiete y veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, por medio del archivo electrónico ***“Informe justificado 06015.pdf” e “Informe Justificado 323.pdf”***, el cual fue puesto a la vista en fecha veintitrés de octubre del mismo año***.***

Así mismo, se aprecia que no se llevaron a cabo audiencias durante la sustanciación del recurso de revisión, ni se ofrecieron pruebas por parte del **Recurrente**; todo lo anterior en términos de los artículos 185 fracciones II y IV, y 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**SEXTO. De la Acumulación**

Posteriormente por acuerdo del Pleno del Instituto, en la **Trigésima Séptima Sesión** Ordinaria de Pleno, de fecha **dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro**, se determinó acumular los recursos de revisión en estudio, ya que existe identidad del solicitante, del Sujeto Obligado y similitud de causas y objeto de solicitud. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, y con el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los cuales establecen respectivamente:

“Artículo 195. En la tramitación del recurso de revisión se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.”

“Artículo 18. La autoridad administrativa o el Tribunal acordarán la acumulación de los expedientes del procedimiento y proceso administrativo que ante ellos se sigan, de oficio o a petición de parte, cuando las partes o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos, para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. La misma regla se aplicará, en lo conducente, para la separación de los expedientes.”

**SÉPTIMO. Del Cierre de Instrucción.**

Por lo que una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes de siete días hábiles para realizar sus manifestaciones en el acuerdo de admisión, y no habiendo prueba pendiente por desahogar, ni que documentos que integrar al expediente electrónico, se decretó el cierre de instrucción en fecha **veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro**, en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar el expediente a la resolución que en derecho proceda.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver los presentes recursos de revisión interpuestos por el ahora **Recurrente**, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Sobre los alcances del recurso de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es preciso e importante señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

El Recurso de Revisión en estudio contiene los elementos normativos de validez exigidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establecidos en el artículo 180 que enuncia:

*“Artículo 180. El recurso de revisión contendrá:*

*I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;*

***II. El nombre del solicitante que recurre*** *o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*

*III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;*

*IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;*

*V. El acto que se recurre;*

*VI. Las razones o motivos de inconformidad;*

*VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, en el caso de respuesta de la solicitud; y*

*VIII. Firma del recurrente, en su caso, cuando se presente por escrito, requisito sin el cual se dará trámite al recurso.*

*Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.*

*En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.*

***En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, VII y VIII.”***

Cabe señalar que El Recurrente ejerció de manera anónima su derecho de acceso a la información pública, sin embargo, no es motivo para desechar las solicitudes de acceso a la información pública conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que señala lo siguiente:

|  |
| --- |
| *“Las solicitudes anónimas, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante.”* |

Robusteciendo lo anterior se encuentra lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 párrafos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se establece lo siguiente:

|  |
| --- |
| ***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***  *“Artículo 6°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*  *(…)*  *Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*  *(…)*  *III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*  *IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.”*  ***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***  *“Artículo 5.- En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantía para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.*  *(…)*  *Toda persona en el Estado de México, tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*  *(…)*  *El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*  *Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*  *III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos;*  *IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta Constitución.*  *(…)*  *VIII. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. (…)”* |

Por lo cual, de una interpretación sistemática, conforme y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que, **incluso, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad**.

En conclusión, se cubrieron los requisitos de procedencia y procedibilidad y conforme a las constancias que obran en el expediente.

**TERCERO. De las causas de improcedencia.**

En el procedimiento de acceso a la información y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad, los cuales deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo garante.

Siendo facultad de este Órgano entrar al estudio de las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio por este Resolutor y por ende objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto, en los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso, generando eficacia jurídica en las resoluciones, máxime que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia, la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión, sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1). Así las cosas, del análisis de los expedientes electrónicos no se advierte ninguna causa de improcedencia que se actualice ni mucho menos alguna hecha valer por alguna de las partes, procediendo al estudio del fondo del asunto, en los siguientes términos.

**CUARTO. Estudio y resolución del asunto**

El análisis y resolución del presente recurso, se funda en el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Federal y el diverso 8 de la Ley de Transparencia local.

Bajo estas líneas argumentativas, al retomar y delimitar los requerimientos del ahora **Recurrente**, de manera objetiva se precisa que requiere la siguiente información:

1. Número de denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense en 2023 y 2024, tipo de denuncia, dependencia proveniente y medidas implementadas.
2. Paquete de denuncias presentado por la Contraloría a la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) en contra de exfuncionarios mexiquenses.

De conformidad con las constancias que obran en el expediente electrónico, se observa que el **Sujeto Obligado** dio respuesta por medio del sistema SAIMEX, a las solicitudes de informaciónpor medio de los archivos electrónicos denominados:

1. **00350/SECOGEM/IP/2024:**

* ***OFICIO SOLICITANTE.pdf:*** constante de una foja, en formato pdf, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro, firmado por el Encargado de Despacho de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Responsable de la Unidad de Transparencia, en el que sustancialmente remite respuesta a través del archivo siguiente.
* ***OFICIO RESPUESTA SPH.pdf***: constante de seis fojas, en formato pdf, contiene los siguientes oficios:
* 21800002A-1160/2024, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, firmado por el Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas, en el que refiere entregar en sobre cerrado el oficio número 21800001A000000/1719/2024.
* 21800001A000000/1719/2024, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, firmado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Investigación, en el que refiere entregar en sobre cerrado la respuesta que consiste en lo siguiente

“(…)

Sobre el particular, por lo que respecta a “solicito información sobre el número de denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense en 2023 y 2024…”(sic) (subrayado añadido) se informa que en los datos que obran registrados en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), **por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, se recibieron en el sistema de referencia un total de 37,411** (treinta y siete mil cuatrocientas once) denuncias.

Asimismo, por lo que respecta a “… tipo de denuncia, dependencia proveniente, medidas implementadas” (Sic), se comunica que esta autoridad se encuentra impedida para proveer la información que requiere el solicitante, ya que la misma tendría que ser procesada, lo que implica un discernimiento; y en todo caso se estaría contraviniendo el articulo 12 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el cal se refiere que la obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que no están obligados a generarla, resumirla efectuar cálculos o practicar investigaciones.

(…)” (Sic)

1. **00323/SECOGEM/IP/2024:**

* ***RESPUESTA SPH OIC.pdf:*** constante de dos fojas, en formato pdf, contiene el oficio número 221800004000000S/353/2024, de fecha seis de septiembre de dos mil veinticuatro, firmado por el Titular del Órgano Interno de Control, en el que refiere lo siguiente:

“(…)

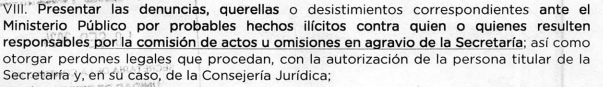
Sobre el particular le informó que, esta autoridad no se encuentra en posibilidades de atender la Solicitud de Acceso a la Información Pública que nos ocupa, toda vez que en la misma no se establece el periodo respecto del cual se solicita la información, no obstante, le informe que **durante el ejercicio fiscal 2023 y lo que va del 2024, este Órgano Interno de Control no ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.**

(…)” (Sic)

* ***RESPUESTA SPH CJIG.pdf:*** constante de dos foja, en formato pdf, de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro, firmado por el Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, en el que refiere lo siguiente:

“(…)

Sobre el particular, le comento que de acuerdo con las atribuciones propias de esta Coordinación Jurídica, Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, establecidas en el numeral 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, esta unidad administrativa se encuentra imposibilitada por razón de competencia para atender la referida solicitud de acceso a la información pública, ya que de la fracción VIII del mencionado artículo dispone lo siguiente:



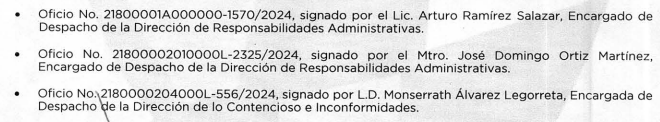
En este sentido, se desprende que la Coordinación Jurídica carece de atribuciones para conocer y en su caso, presentar denuncias penales por actos que por su naturaleza deriven de presuntas irregularidades administrativas cometidas por personas servidoras públicas, es decir, que provengan de actos de fiscalización de la investigación o substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Por su parte, en términos del artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 11 fracción III y 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, los encargados formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, por presuntas irregularidades administrativas cometidas por personas servidoras públicas, son los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal, así como aquellas unidades administrativas básicas de la Secretaría de la Contraloría, en términos de lo establecido en los artículo 20, 21, 22, 24 y 36 de su Reglamento Interior cada uno dentro del ámbito de su respectiva competencia.

Finalmente, a efecto de no afectar el derecho Constitucional del ciudadano, se sugiere realice el re. Direccionamiento de la Solicitud de Acceso a la Información Pública número 00323/SECOGEM/IP/2024 a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas, a efecto de poder dar cumplimiento en los términos de las disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

(…)” (Sic)

* ***RESPUESTA SRADM.pdf:*** constante de seis fojas, en formato pdf, contiene los oficios números:
* 21800002A-1129/2024, de fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, firmado por el Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas, en el que refiere entregar en sobre cerrado los oficios:



* 21800002010000L-2325/2024, de fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, firmado por el Encargado de Despacho de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, en el que refiere lo siguiente:

“…

Al respecto, me permito infórmale que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y sistemas que generan la Dirección de Responsabilidades Administrativas, no se encontró la información relativa a lo solicitado.

…“(Sic)

* 2180002040000L-0556/2024, de fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, firmado por la Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades, en el que refiere entregar en sobre cerrado la siguiente:

“…

**Respuesta:**

**…**

Se hace de su conocimiento que en el último año inmediato anterior a la fecha de la solicitud de acceso a la información pública, ello en armonía con lo plasmado en el criterio de interpretación SO/003/2019 emitido por el INAI, y de acuerdo con lo que obra en los archivos de esta Dirección a mi cargo, **no existen denunciadas formuladas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por parte de la Secretaría de la Contraloría.**

…“(Sic)

* 218000001A000000/1570/2024, de fecha cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, firmado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Investigación, en el que refiere entregar en sobre cerrado la información siguiente:

“…

Al respecto, previa búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección Investigación se informa que, **desde el 30 de agosto de 2023 a la fecha de la presente solicitud**, esta autoridad con motivo de la atribución que tiene conferida en el artículo 21 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 20 de diciembre de 2023, **no ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en los términos que señala el solicitante**, motivo por el cual esta Dirección de Investigación se encuentra imposibilitada para otorgar dicha información.

* ***OFICIO SOLICITANTE UT.pdf:*** constante de una foja, en formato pdf, con fecha dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, firmado por el Encargado de Despacho de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Responsable de la Unidad de Transparencia, en el que sustancialmente remite respuesta al Recurrente por medio de los oficios antes descritos.

Asimismo, en la etapa de manifestaciones se advierte que el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado mediante el archivo electrónico denominado ***“Informe justificado 06015.pdf” e “Informe Justificado 323.pdf”,*** en el que sustancialmente ratifica sus respuestas.

RECURSO DE REVISIÓN **6015/INFOEM/IP/RR/2024**

Ahora bien, quedando establecido lo anterior, este Órgano Garante considera viable realizar el estudio en aras de establecer si la respuesta del Sujeto Obligado colma la pretensión del Recurrente, así como calificar los motivos de inconformidad del particular:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Requerimientos*** | ***Respuesta*** | ***Razones o motivos de inconformidad*** | ***Colma*** |
| Número de denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense en 2023 y 2024, tipo de denuncia, dependencia proveniente, medidas implementadas | El Encargado del Despacho de la Dirección de Investigación, informo que recibieron 37,411 denuncias.  Respecto al tipo de denuncia, dependencia proveniente y medidas implementadas refirió que no están obligados a generar documentos ad hoc. | “Si bien la dependencia no está obligada a generar documentos ad hoc, si está obligada de proporcionar la documentación donde se puede corroborar la información que se genere dentro de sus atribuciones, por lo que negarla bajo el pretexto de no querer procesar la información solicitada es un pretexto infundado para no transparentar datos que deben ser de acceso público.” (sic) | ***Sí*** |

En primer lugar, es de señalar que de los motivos de inconformidad en cita se aprecia que el particular únicamente se inconforma sobre que no están obligados a generar la información conforme al interés del particular, sin que se aprecie inconformidad alguna respecto del número de denuncias presentadas en 2023 y 2024.

Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que, si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

De la interpretación del criterio antes citado, se advierte que cuando el particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, no expresó razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, por tanto, estos deben declararse atendidos.

Atento a ello, es importante traer a contexto la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

Para mayor abundamiento, también resulta aplicable el criterio 01/20 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que a la letra estipula lo siguiente:

**Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis**. Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.

Por lo que, al no haberse inconformado sobre todos los rubros solicitados, se consideran actos consentidos y, por tanto, se tienen por colmados dichos rubros de la solicitud.

Para establecer si el Sujeto Obligado está obligado o no a tener la información relativa al tipo de denuncia, dependencia proveniente y medidas implementadas, es necesario traer a colación el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 19. Quedan adscritas a la **Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas,** las unidades administrativas siguientes:

1. **Dirección de Investigación**;
2. Dirección de Responsabilidades Administrativas;
3. Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones, y
4. Dirección de lo Contencioso e Inconformidades.

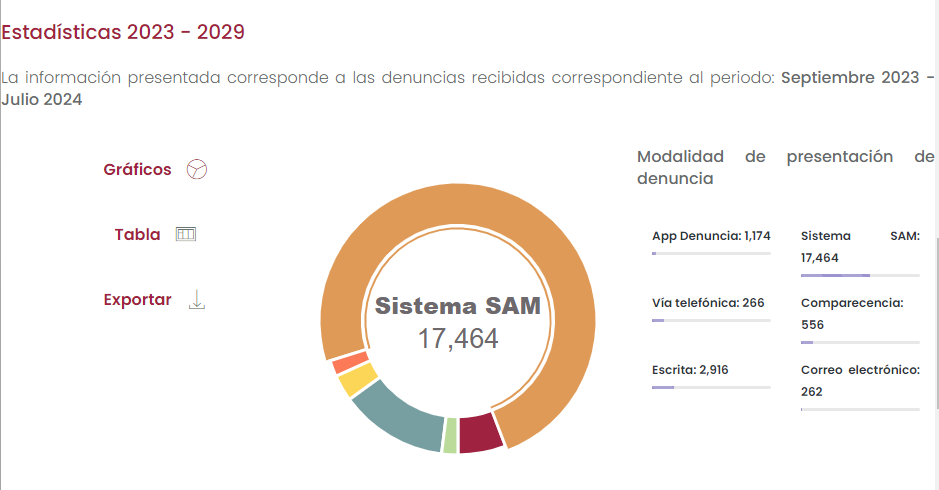
Artículo 21. Corresponden a la Dirección de Investigación las atribuciones siguientes:

1. **Recibir y analizar las denuncias** y los resultados de auditorías que se presenten, así como llevar acabo los actos de oficio por presuntas infracciones o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones cometidas **por personas servidoras públicas de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo**, y de particulares vinculados con faltas administrativas graves, en términos de la Ley de Responsabilidades, así como instruir su remisión, a través del sistema correspondiente a los órganos internos de control, en su caso, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
2. Iniciar las acciones para iniciar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías realizadas por las autoridades competentes, las investigaciones por presuntas faltas administrativas o infracciones cometidas por las personas servidoras públicas o de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, en términos de la Ley de Responsabilidades; así como instruir la remisión de las investigaciones iniciadas, al Órgano Interno de Control competente, cuando así se estime procedente;
3. Atraer las investigaciones que hubieren sido iniciadas por los órganos internos de control; y de considerarlo procedente, dirigir directamente aquellas que se hayan presentado en la Secretaría; previo acuerdo con la persona titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas;
4. Suscribir los informes, demandas, contestaciones y desahogos de vista en los juicios y procedimientos en los que sea parte, así como intervenir en el cumplimiento y defensa de las resoluciones respectivas, rendir los informes, cumplimentar los requerimientos y solicitudes de información formulados por las autoridades del orden penal, judicial, administrativa y en materia de defensa de derechos humanos, relacionados con los asuntos de su competencia;
5. Establecer, previo acuerdo con la persona titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas, los principios, lineamientos, bases, guías, manuales o protocolos en materia de investigación, derivadas de auditorías practicadas por autoridades competentes, por actuación de oficio o por presentación de denuncias que deban observar los órganos internos de control, previa consideración de la persona titular de la Secretaría;
6. Integrar y verificar la información del sistema de evolución patrimonial, de las personas servidoras públicas, derivado de las verificaciones aleatorias que realice la Dirección de Registro de Declaraciones y Sanciones;
7. Desarrollar las investigaciones correspondientes y verificar la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas, e integrar el expediente respectivo, de conformidad con el procedimiento de investigación previsto en la Ley de Responsabilidades;
8. Requerir, cuando lo estime necesario, la presentación del denunciante, para la ratificación de la denuncia presentada por actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y particulares vinculados con faltas administrativas graves, en términos de la Ley de Responsabilidades, o incluso a personas servidoras públicas que puedan tener conocimiento de los hechos, a fin de constatar la veracidad de los mismos;
9. Requerir la información o documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación en términos de la Ley de Responsabilidades, a las dependencias y organismos auxiliares, incluyendo aquélla que las disposiciones jurídicas en la materia, consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de faltas administrativas a que se refiere la Ley de Responsabilidades, con la obligación de mantener la misma con reserva o secrecía, conforme a dichas disposiciones;
10. Solicitar información o documentación a las autoridades, relacionada con la materia fiscal, bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios, en términos de la Ley de Responsabilidades; y para cualquier persona física o jurídica colectiva, con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas graves;
11. Instrumentar las acciones correspondientes y definir las medidas necesarias en los casos de denuncias presentadas de manera anónima, con el propósito de garantizar, proteger y mantener la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. En este contexto, la autoridad investigadora solicitará las medidas cautelares requeridas según la naturaleza de cada caso, pudiendo otorgarlas de oficio o a solicitud del denunciante;
12. Participar como parte interesada, en los procedimientos de responsabilidad administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades;
13. Proponer y supervisar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, incluyendo acciones encubiertas y usuario simulado con apego a la legalidad de la Ley de Responsabilidades;
14. Requerir, cuando lo estime necesario la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o de cualquier otra institución pública o educativa, que permita el acceso a los instrumentos tecnológicos que se requieran para la realización de la investigación; así como la intervención de un perito en la ciencia, arte, técnica, industria, oficio o profesión adscritos a tales instituciones para determinar la autenticidad de cualquier documento o elemento relacionado con los hechos motivo del procedimiento de investigación;
15. Integrar y emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con los requisitos que establece la Ley de Responsabilidades y presentarlo a la autoridad substanciadora, a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa;
16. Requerir a las unidades substanciadoras y resolutoras, la imposición de las medidas cautelares en términos en la Ley de Responsabilidades del Estado de México y Municipios, y normatividad aplicable;
17. Proponer y presentar, las denuncias o querellas que procedan por la probable responsabilidad de orden penal que se detecte en la sustanciación del procedimiento de investigación, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en su caso ante el homólogo en el ámbito federal;
18. Dictar las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones y requerimientos, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
19. Emitir el Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas en materia de responsabilidades administrativas, cuando así proceda.
20. Revisar y analizar la documentación que integre las investigaciones a su cargo, para determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave;
21. Atender la prevención realizada por la autoridad substanciadora cuando esta le advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, contiene omisiones, requiere aclaraciones en los hechos narrados o carece de alguno de los requisitos señalados en la Ley de Responsabilidades, para subsanarlos;
22. Determinar y comunicar, los criterios de interpretación de disposiciones jurídicas en las materias de su competencia, previa consideración de la persona Titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas;
23. Impugnar la determinación de las autoridades substanciadoras o resolutoras de abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
24. Interponer, en tiempo y forma, los recursos administrativos que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables en el ámbito de competencia;
25. Requerir la colaboración de las autoridades competentes, para las notificaciones personales que deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren fuera de la jurisdicción, mediante exhorto o carta rogatoria;
26. Administrar, supervisar y vigilar la actualización de los sistemas electrónicos relativos a procedimientos de investigación que lleve respecto de faltas administrativas en términos de la Ley de Responsabilidades, de atención de denuncias; dirigir y coordinar el Registro Estatal de Inspectores, conforme a las disposiciones correspondientes;
27. Brindar las asesorías a los órganos internos de control, cuando así se requiera, en materia de los procedimientos de investigación de conductas que puedan constituir faltas administrativas, conforme a la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones aplicables;
28. Proponer a la persona Titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas, los criterios y directrices para operar los sistemas electrónicos para el desahogo de los procedimientos de investigación, de atención de denuncias y del Registro Estatal de Inspectores, así como brindar el servicio de consulta pública correspondiente en términos de la normatividad aplicable;
29. Supervisar y verificar que el programa anual de trabajo de los órganos internos de control en dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo en materia de investigación se ejecute conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones jurídicas aplicables;
30. Supervisar el seguimiento de la información para la integración de los indicadores de la Dirección y el plan anual de trabajo de sus unidades administrativas;
31. Revisar, analizar y, en su caso, tramitar las peticiones que presenten los particulares con motivo del incumplimiento de los acuerdos, convenios o contratos que hubieren celebrado con las dependencias u organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, y
32. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y aquellas que le encomiende la persona titular de la Secretaría o la persona que sea su superior jerárquico.

De lo anterior se tiene que, le corresponde a la Dirección de Investigación recibir y analizar las denuncias presentadas por los ciudadanos, sin embargo, de sus facultades no se desprende que deban tener información derivada de las denuncias presentada como el tipo de denuncia, la dependencia de donde proviene la denuncia así como las medidas implementadas.

Por otro lado, en la página de la Secretaría de la Contralorías se advierte que publicó estadísticas sobre la modalidad de presentación de las denuncias, pero no sobre el tipo de denuncia, dependencia proveniente y medidas implementadas, tal como se ilustra:







Nuestra Carta Magna dispone que para el ejercicio del derecho de acceso a la información los Estados deben observar diversos principios y bases, entre los cuales se establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, órgano, organismo, órganos autónomos, así como de cualquier sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, ello se aprecia en el Artículo 6, apartado A, numeral I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece:

***Artículo 6***

*…*

*Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

1. *Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 3, fracción XI y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales son del tenor literal siguiente:

***Artículo 3.-*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI.******Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,* ***cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración.*** *Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona,*** *en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones****.*

De la interpretación a los preceptos citados, se desprende que es información pública la contenida en los documentos que los Sujetos Obligados generen, administren o se encuentre en su posesión en el ejercicio de sus atribuciones y que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona.

Señalado lo anterior, resulta importante hacer mención que los motivos de inconformidad del Recurrente van encaminados a la información incompleta, por ello se infiere que la *litis* radica en establecer si el Sujeto Obligado entregó la información requerida por el particular que en derecho corresponde.

En tal tesitura, este Órgano Garante estima que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte Recurrente son infundados, en virtud de que, la respuesta se emitió por el servidor público habilitado, tal como ya quedo precisado en párrafos anteriores, por lo que, se tiene que la autoridad que emitió la respuesta y el documento remitido satisface la pretensión del particular.

En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, toda vez que, los Sujetos Obligadosno tienen el deber de generar, poseer o administrar la información pública con el grado de detalle solicitado; esto es, que no tienen el deber de generar **un documento *ad hoc***, para satisfacer el derecho de acceso a la información pública.

Como apoyo a lo anterior, es aplicable el Criterio 03-17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dice:

***No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.*

En virtud de lo anterior, este Órgano Garante arriba a la conclusión de que la respuesta primigenia del **Sujeto Obligado** se encuentra dotada de los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales a toda luz garantizan el derecho de acceso a la información pública. Robustece lo anterior el criterio **02/17** del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que dispone a la literalidad lo siguiente:

***“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.***

*De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7****; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad.*** *Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.*

* *RRA 0003/16 Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.*
* *RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.*
* *RRA 1419/16 Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.”* ***(Sic)***

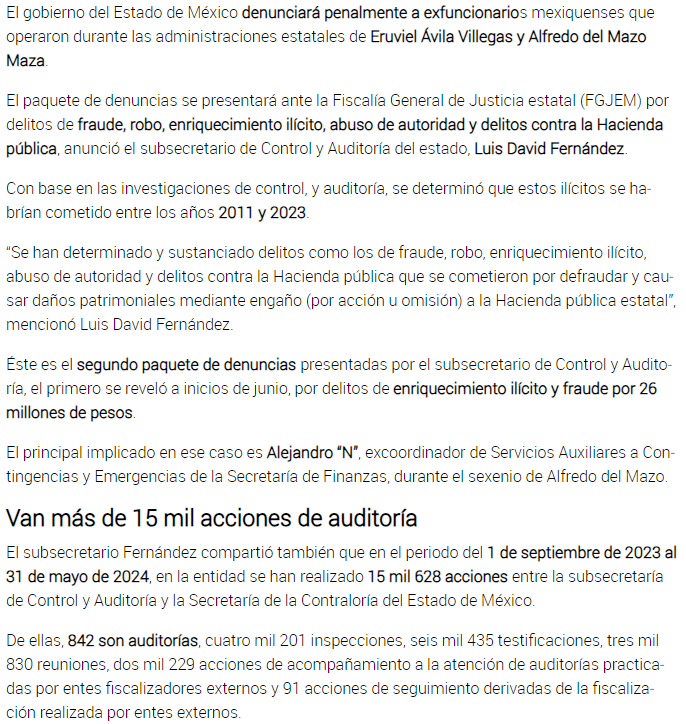
Con base en lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión de que la respuesta del **Sujeto Obligado** colmó el derecho de acceso a la información ejercido por el particular.

Recurso de Revisión **06016/INFOEM/IP/RR/2024**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Requerimientos*** | ***Respuesta*** | ***Razones o motivos de inconformidad*** | ***Colma*** |
| Paquete de denuncias presentado por la Contraloría a la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) en contra de exfuncionarios mexiquenses | Durante el ejercicio fiscal 2023 y lo que va del 2024, el Órgano Interno de Control no ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.  La Dirección de Responsabilidades Administrativas informó que no encontró información al respecto.  La Coordinación Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia refirió que presentar denuncias, no forma parte de sus atribuciones. | “La dependencia afirma que no cuenta con dicha información; sin embargo, ellos mismos lo anunciaron de forma pública como se muestra en el siguiente link: https://smmp.edomex.gob.mx/noticia/edomex-alista-denuncias-penales-exfuncionarios-eruviel-mazo-por-dano-hacienda” (sic) | *No* |

En primer término, de las manifestaciones vertidas por la parte Recurrente, se tiene que el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, a través de su portal de internet publicó lo siguiente:





A mayor abundamiento, es importante establecer quién es el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, para ello el Decreto del Ejecutivo del Estado de México por el que se modifica el diverso por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en su artículo 1, el cual establece:

Artículo 1. Se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, denominado Sistema Mexiquense de Medios Públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno.

Con base a lo anterior, sirve de sustento a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales:

**HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO**

Conforme al artículo [88 del Código Federal de Procedimientos Civiles](about:blank) los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.

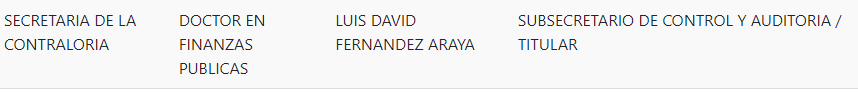
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014.”

**PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.** Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo.

Ahora bien, de la publicación referida se tiene que quien anunció el envío del segundo paquete de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Estatal por delitos de fraude, robo, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y delitos contra la hacienda pública fue el Subsecretario de Control y Auditoría.

Del portal de internet de la Secretaría de la Contraloría, específicamente en el directorio, se advierte que el Servidor Público Luis David Fernández Araya, es el Subsecretario de Control y Auditoría, tal como se ilustra:



Quedando establecido lo anterior, es necesario traer a colación el Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 4. Para el estudio, planeación y atención de los asuntos de su competencia, al frente de Secretaría estará una persona titular, quien se auxiliará de las unidades administrativas básicas siguientes:

1. **Subsecretaría de Control y Auditoría;**

…

**XI. Dirección de Responsabilidades Administrativas;**

Artículo 12. Quedan adscritas a la Subsecretaría de Control y Auditoría, las unidades administrativas siguientes:

1. Dirección de Auditoría y Control a Obra Pública;
2. Dirección de Auditoría y Control de Programas;
3. Dirección de Auditorías Especiales y Externas;
4. Dirección de Coordinación y Enlace del Órganos Interno de Control, y
5. Dirección de Seguimiento y Apoyo Técnico

Artículo 13. Corresponden a la Subsecretaría de Control y Auditoría las atribuciones siguientes:

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las unidades administrativas que tenga adscritas, conforme a las instrucciones de la persona titular de la Secretaría, en coordinación con la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación;
2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en el despacho de los asuntos de su competencia;
3. Establecer en la Administración Pública Estatal, acciones que propicien el fortalecimiento del sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, a efecto de prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas en la gestión gubernamental considerando, en su caso, las políticas que emita el Comité Coordinador en estas materias, e impulsar y proponer dichas acciones en el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, mediante la formalización de los respectivos instrumentos jurídicos, previa consideración de la persona titular de la Secretaría;
4. Representar a la Secretaría en las funciones y comisiones que la persona titular de la Secretaría le delegue o encomiende, y comunicar los avances e informes sobre su cumplimiento;

Artículo 21. Corresponden a la Dirección de Investigación las atribuciones siguientes:

…

XVII. Proponer y presentar, las denuncias o querellas que procedan por la probable responsabilidad de orden penal que se detecte en la sustanciación del procedimiento de investigación, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en su caso ante el homólogo en el ámbito federal;

Artículo 36. Corresponden al Órgano Interno de Control de la Secretaría, las atribuciones siguientes:

XX. Presentar las denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en su caso ante el homólogo en el ámbito federal;

De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de la Entidad, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas es competencia de la **Secretaría de la Contraloría y los Órganos Internos de Control**, siendo que, para el caso de la existencia de faltas administrativas no graves, estos podrán substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad correspondientes, tal como se advierte a continuación:

***“Artículo 10.*** *La* ***Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control*** *tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas.*

*En el caso de la Contraloría del Poder Legislativo, será competente respecto de los servidores públicos de elección popular municipal y de los mismos servidores públicos del Poder Legislativo.*

*Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, la Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control, serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley.*

*En el supuesto que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley.*

Por lo anterior, este Instituto resalta que, si bien, por regla general, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, debemos considerar que también hay excepciones, es decir, que se trate de información clasificada (confidencial o reservada), en cuyo caso, se restringirá, excepcionalmente, el acceso conforme a lo señalado en la ley en la materia.

En el presente asunto no es la excepción, pues la reserva de la información implica una clasificación, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual **El Sujeto Obligado** determina que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

De lo anterior, este Instituto resalta que, si bien, por regla general, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, debemos considerar que también hay excepciones, es decir, que se trate de información clasificada (confidencial o reservada), en cuyo caso, se restringirá, excepcionalmente, el acceso conforme a lo señalado en la ley en la materia; entendiendo a esta información, de conformidad con el artículo 3, fracciones XXI, XXIII y XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de la siguiente manera:

* **Información confidencial:** Se considera como información confidencial los **secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.**
* **Información privada:** La contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.
* **Información reservada:** La clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de esta Ley, cuya divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por esta Ley.

En resumen, se determina que, excepcionalmente, la información pública, podrá ser **clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley de Transparencia**; así como confidencial, tratándose principalmente de aquella que refiera a la información privada y datos personales concernientes a una persona física.

En virtud de lo anterior, el derecho de acceso a la información pública se traduce en la prerrogativa constitucional de acceder a soportes documentales generados**, poseídos o administrados** por los sujetos obligados.

De manera complementaria, no se omite señalar que tratándose de responsabilidades administrativas y otros tópicos, no podrá invocarse con el carácter de reservada, aquella información que se encuentre relacionada con posibles violaciones a derechos humanos delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, preceptos legales que establecen lo siguiente:

**LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:**

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

**LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**

**Artículo 142. Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:**

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos, calificada así por autoridad competente;

II. Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;

III. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y

IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

**LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.**

Trigésimo séptimo. No podrá invocarse el carácter de reservado de la información cuando:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos;

II. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano, así como en las disposiciones legales aplicables;

III. Se trate de información relacionada con actos de corrupción. Lo anterior, en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias, en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y de acuerdo con las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; o

IV. Cuando se trate de información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general de partidos políticos con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados; lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos.

En ese sentido, se puede hacer notar el derecho de todo individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona (derecho a la intimidad), aunado al derecho a la propia imagen es el derecho de decidir, de forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás.

Es por ello que se advierte que la información solicitada debe ser clasificada como reservada de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral vigésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como los artículos 91, 128, 129, 140, fracciones VI y XI y 141, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, preceptos legales que a la letra establecen:

***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

***Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

***I.*** *Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;*

***V.*** *Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*

***VI.*** *Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;*

***VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;***

***VIII.*** *La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;****IX.*** *Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*

***X.*** *Afecte los derechos del debido proceso;*

***XI.*** *Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*

***XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y***

***XIII.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.*

***Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información***

***Vigésimo cuarto.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:*

***I.*** *La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;*

***II.*** *Que el procedimiento se encuentre en trámite;*

***III.*** *La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y*

***IV.*** *Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.*

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.***

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 128.*** *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.*

*Tratándose de aquélla información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

***Artículo 129.*** *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, justificando que:*

***I.*** *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;*

***II.*** *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*

***III.*** *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

*II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

*III. Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

*IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***…***

***VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;***

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

***IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;***

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.*

***Artículo 141.*** *Las causales de reserva previstas en este Capítulo se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.*

Cabe precisar que la clasificación es un acto administrativo mediante el cual se restringe el derecho de acceso a la información, mediante el cual los **Sujetos Obligados** determinan que la información requerida actualiza alguno de los supuestos de confidencialidad **o reserva,** de acuerdo con las bases y los principios inmersos en la normatividad aplicable.

Por lo que para realizar la reserva de la información no basta con exponer alguna de las causales previstas en la Ley de Transparencia local, en sentido contrario dicha valoración debe de realizarse a través de la ***“prueba de daño”*** que consiste en exponer los argumentos y razones, basados en elementos objetivos o verificables, a partir de los cuales se derive que la divulgación de información, en particular, puede afectar, poner en riesgo o dañar el interés protegido.

En consecuencia, el **Sujeto Obligado**, deberá realizar la prueba de daño y precisar las razones por las cuales la apertura de la información generaría una afectación, para ello referir que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable, además establecer que el perjuicio supera de momento el interés público general que pudiera existir sobre la información requerida; pues, podría comprometer las tareas de seguridad pública e incluso poner en, riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física.

En este punto es importante resaltar que los sujetos obligados son los que cuentan con la atribución exclusiva de analizar y ponderar si la información que poseen actualiza alguna de las hipótesis previstas en las fracciones citadas, mediante la aplicación, caso por caso de la **prueba de daño**. Esto en apego a lo dispuesto en los artículos 3 fracción XXXIII, 128, 129, 130 y 131 de la Ley de Transparencia local, como se observa a continuación:

***Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XXXIII.******Prueba de Daño:******Responsabilidad de los sujetos obligados de demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley****, y que el menoscabo o daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla y por consiguiente debe clasificarse como reservada;*

***Artículo 128.*** *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además,* ***el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño****.*

*Tratándose de aquélla información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

***Artículo 129****.* ***En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación****, justificando que:*

1. *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;*
2. *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*
3. *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

***Artículo 130. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia****, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley General y la presente Ley, aduciendo analogía o mayoría de razón.*

***Artículo 131. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en esta Ley corresponderá a los sujetos obligados****; en tal caso deberá fundar y motivar debidamente la clasificación de la información, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.*

Del mismo modo, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas establecen con relación al a prueba de daño lo siguiente:

***Prueba de daño:******La argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable*** *y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; (…)*

Asimismo, el Poder Judicial de la Federación emitió las tesis con número de registro 2011541[[2]](#footnote-2) y 2018460[[3]](#footnote-3) en las que, respectivamente, se dispone lo siguiente:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES.***

*Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la existencia de los mecanismos correspondientes y de procedimientos de revisión expeditos, y dispone que ese derecho humano comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, que toda la generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. Además señala, como regla general, el acceso a dicha información y, por excepción, la clasificación. Es así que para clasificar la información como reservada, debe hacerse un análisis, caso por caso, mediante la aplicación de la "prueba de daño". Sin perjuicio de lo anterior****, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamentación y motivación que sustente dicha clasificación****. Por otra parte, si alguien intenta revertir determinada clasificación de información que estima no es confidencial, debe plantearlo ante la autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decretada y a los probables afectados, para el evento de que se reclasifique, a través de la "prueba del interés público". De lo anterior* ***se advierte que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder*** *y, contra la decisión que adopten, procede interponer el recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda. En consecuencia,* ***la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligado****s, en tanto que al Juez de amparo sólo compete facilitar, bajo su más estricta responsabilidad, el acceso a la que sea "indispensable para la adecuada defensa de las partes".*

***PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE.***

*De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016,* ***la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta****. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así,* ***la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular.*** *Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.*

Por lo tanto, con base en el estudio a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder y **que la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligados, mediante la formación de la prueba de daño**.

De lo argumentado anteriormente se desprende que los sujetos obligados al ser quienes generan, poseen o administran la información en uso de sus atribuciones de derecho público, son a quienes corresponde exclusivamente realizar la aplicación de la prueba de daño a la información que obra en sus archivos, y, mediante su realización, aportar los argumentos necesarios para demostrar fehacientemente que la divulgación de la información provoca un daño a un interés jurídicamente protegido.

Atento a lo anterior, el **Sujeto Obligado**, deberá realizar la prueba de daño y precisar las razones por las cuales la apertura de la información generaría una afectación, para ello referir que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable, además establecer que el perjuicio supera de momento el interés público general que pudiera existir sobre la información requerida; pues, podría obstruir las actividades de investigación desempeñadas por la Dirección General de Seguridad y Protección, riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física, así como causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales.

Ahora bien, para aplicar la prueba de daño, se deberán de precisar las razones objetivas por las que la apertura genera una afectación, acreditando que:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;
* El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y
* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Sobre el primer supuesto consideremos que según el diccionario del español jurídico, por riesgo podemos entender “la contingencia o proximidad de un daño”,[[4]](#footnote-4) mientras que el daño es considerado como un “perjuicio o lesión”[[5]](#footnote-5), mientras que según el Diccionario de la Lengua Española, lo real es lo “(q)ue tiene existencia objetiva”,[[6]](#footnote-6) mientras que lo demostrables es, según la misma fuente, aquello que se puede demostrar,[[7]](#footnote-7)es decir, m)anifestar, declarar. Probar, sirviéndose de cualquier género de demostración, [enseñar](http://dle.rae.es/?id=FdI00Or#6nAyKjE) mostrar o exponer algo)”.[[8]](#footnote-8) Mientras que lo identificable es lo que puede ser identificado,[[9]](#footnote-9) esto es,  “(d)ar los datos necesarios para ser reconocido”.[[10]](#footnote-10)

Por lo que entonces, el primer supuesto de la prueba de daño consiste en acreditar que la entrega de la información provoca tres aspectos concurrentes: 1) la contingencia o proximidad de un daño, un perjuicio o lesión que tiene existencia objetiva, que se puede manifestar, declarar o probar mediante cualquier género de demostración a partir de proporcionar datos necesarios para reconocer el daño, perjuicio o lesión que provocaría a un interés público o a la seguridad pública.

Identificado ese riesgo, se debe demostrar que el mismo supera el interés público general porque se difunda dicha información.

Y, por último, que la limitación es acorde con el principio de proporcionalidad, para ello, se sugiere emplear los tres juicios propuestos por la Corte Constitucional Colombiana[[11]](#footnote-11), siguiendo el principio de ponderación propuesto por el Tribunal Constitucional Alemán,[[12]](#footnote-12) el juicio de idoneidad, que la medida adoptada sea la idónea para el ejercicio del derecho; de necesidad, que sea necearía para que el derecho que prevalece se ejerza y el de estricta proporcionalidad esto es, que el derecho que prevalezca sea en la dimensión estrictamente proporcional al derecho que retrocede.

Es así como, al configurarse tales requisitos, se otorga certidumbre jurídica y se protege la esfera más íntima del derecho humano constitucional y convencionalmente reconocido.

Los acuerdos de reserva deberán de cumplir con los siguientes parámetros de forma y fondo:

1. Número de folio de la solicitud
2. Referencia de la información solicitada
3. Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada.
4. Fundamento y Motivación Legal.
5. Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva de la información.

**Prueba de Daño**

1. Riesgo real, demostrable e identificable (Modo, Tiempo y lugar)
2. Temporalidad de la Reserva de la Información
3. Autoridades competentes.

Bajo este contexto, se arriba a la premisa de que la normatividad aplicable reconoce y enlista de manera restrictiva diversos supuestos encauzados a clasificar la información como reservada, englobando la relativa a procedimientos administrativos o judiciales.

Debido a lo anterior, se arriba a la premisa de que, frente a la colisión de derechos fundamentales, se debe de recurrir al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o principios siguientes:

1. **Idoneidad:** Existe un inminente interés público y colectivo de conocer la documentación que contiene el conflicto por límites territoriales entre los municipios de Tepotzotlán y Teoloyucan, lo anterior al tomar en consideración que propicia a la transparencia, rendición de cuentas e incluso a la gestión pública.
2. **Necesidad:** No existe un medio menos oneroso para lograr el fin constitucionalmente valido, el derecho de acceso a la información es la única vía para que cualquier ciudadano pueda acceder a expedientes o anexos de conflictos territoriales.
3. **Proporcionalidad:** La difusión de la información conduce a mayores efectos positivos para la sociedad y una afectación menor en el bien jurídico de la secrecía, favoreciendo a los intereses de la ciudadanía.

Ahora bien, respecto a la ***TEMPORALIDAD*** de ***RESERVA*** de la información, es de señalar que el artículo 125, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en el artículo 101, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contemplan que la información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter **hasta por un periodo de cinco años, contados a partir de su clasificación**, salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción, dejaran de existir los motivos de su reserva.

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundados los motivos de inconformidad que arguye el **Recurrente** en su medio de impugnación que fue materia de estudio, por ello con fundamento en la ***segunda hipótesis*** de la fracciónIII, del artículo 186,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información número **00323/SECOGEM/IP/2024 y** se **CONFIRMA** la respuesta a la solicitud de información número **00350/SECOGEM/IP/2024**, que han sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y,

**SE RESUELVE**

**PRIMERO**. Se **CONFIRMA** la respuesta entregada por **EL SUJETO OBLIGADO** a la solicitud de información número **00350/SECOGEM/IP/2024,** por resultar infundados los motivos de inconformidad que arguye la parte **RECURRENTE**, en términos del **Considerando CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO**. Se **MODIFICA** la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO** en la solicitud de información número **00323/SECOGEM/IP/2024,** por resultar fundados los motivos de inconformidad del Recurrente **y** se **ORDENA** al **Sujeto Obligado**, en términos del considerando **CUARTO** de esta resolución, haga entrega, de lo siguiente:

1. Acuerdo que emita el Comité de Transparencia dedidamente fundado y motivado, por el cual se clasifique como reservado el paquete de denuncias presentadas por la Secretaría de la Contraloría ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

Para el caso de que dentro del paquete de denuncias se encuadre dentro de **los supuestos del artículo 142 de la Ley de Transparencia Local**, el Sujeto Obligado deberá entregar la información en versión pública; para la entrega en versión pública deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición del recurrente

**TERCERO.** **Notifíquese**al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, para que conforme al artículo 186 último párrafo y 189 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, debiendo informar a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente **y** **se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.**

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. Notifíquese** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** al **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con lo establecido en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO ACORDÓ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR) Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ. -------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CCR/LMST

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Tesis [A.]: I.1º.A.E.133 A, T.C.C., *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 29, tomo III, abril de 2016, p. 2133. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tesis [A.]: I.10º.A.79 A, T.C.C., *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 60, tomo III, noviembre de 2018, p. 2318. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://dej.rae.es/#/entry-id/E216930> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://dej.rae.es/#/entry-id/E87450> [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://dle.rae.es/?id=VGqyuLj|VGtxgAo|VGuc9Wg> [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://dle.rae.es/?id=CAjNzMR> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://dle.rae.es/?id=CAqWkEB> [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://dle.rae.es/?id=KtnHLLd> [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://dle.rae.es/?id=KtpfgjV> [↑](#footnote-ref-10)
11. “En las sentencias C-093 de 2001 y C-671 de 2001, se explicó el alcance de este tipo de escrutinio, denominado test integrado de igualdad: "[a] fin de determinar si el trato discriminatorio vulnera el derecho fundamental a la igualdad, la Corte ha elaborado un modelo de análisis que integra el juicio de proporcionalidad y el test de igualdad. Lo que en este modelo se hace, básicamente, es retomar y armonizar los elementos del test o juicio de proporcionalidad europeo con los aportes de la tendencia estadounidense. Así, se emplean las etapas metodológicas del test europeo, que comprende las siguientes fases de análisis: (i) se examina si la medida es o no adecuada, es decir, si constituye o no un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (ii) se analiza si el trato diferente es o no necesario o indispensable; y (iii) se realiza un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencia. De otra parte, se toman los distintos niveles de intensidad en la aplicación de los escrutinios o tests de igualdad. Dichos niveles pueden variar entre (i) estricto, en el cual el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso; (ii) intermedio, es aquel en el cual el fin debe ser importante constitucionalmente y el medio debe ser altamente conducente para lograr el fin propuesto; y (iii) flexible o de mera razonabilidad, es decir que es suficiente con que la medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento. Lo anterior debe tener aplicación, según el carácter de la disposición legislativa o la medida administrativa atacada". El test integrado fue aplicado en un caso de discriminación por VIH en la sentencia T-376 de 2013.” Citado en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gonzales Lluy y otros contra Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 01 de septiembre de 2015. Párr. 256.   [↑](#footnote-ref-11)
12. Tribunal Constitucional Alemán. Resolución sobre los soldados son asesinos, de 10 de octubre de 1995 (BVerfGE 93, 266). En ALÁEZ CORRAL, Benito y ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Leonardo. Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal Alemán en las encrucijadas del cambio de milenio. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y boletín oficial del Estado, Madrid, 2008. Pp. 1045-1096. [↑](#footnote-ref-12)